

7 DE CADA 10 MAYORES SIN JUBILACIÓN NO SON POBRES

Las moratorias previsionales destinadas a jubilar a personas sin aportes han provocado un desborde administrativo. Ante esta realidad, el Gobierno dispuso que se le dará prioridad a las personas que no esten percibiendo otro beneficio previsional o asistencial. Esto va a profundizar las inequidades dado que, según datos oficiales, la mayoría de las personas mayores sin jubilación no son pobres, mientras que, por otro lado, una proporción importante de las que tienen jubilación todavía no logran superar la pobreza.

El Gobierno nacional dispuso mantener el mecanismo que permite a personas mayores de 65 años varones y 60 años mujeres acceder a una jubilación sin haber realizado aportes. El único requisito es simular haber trabajado y adherir a una moratoria que, salvo la primera cuota, se va amortizando a través de descuentos sobre el haber previsional. Como era previsible, las demandas para acceder a este beneficio desbordaron la capacidad administrativa de ANSES. Frente a esta realidad, un reciente decreto dispuso que se deberá **priorizar** el acceso a aquellos mayores que no tengan otra fuente de ingreso. Esto implica que, por ejemplo, personas que reciben una pensión o un plan asistencial deberán esperar hasta que se descongestione la ANSES para recién poder acceder a la moratoria.

¿Mejorará la equidad esta disposición? Según proyecciones del INDEC hay aproximadamente **4,6 millones de personas mayores de 60 y 65 años, mujeres y varones, respectivamente**. Extrapolando en función de datos extraídos de la EPH del INDEC correspondientes al segundo trimestre del 2006, se puede estimar que:

- El **43%** de estas personas no tiene jubilación, es decir, se trata de aproximadamente **2 millones de personas**.
- De esta personas que no tienen jubilación, un **74%** no es pobre, es decir, **1,5 millones de personas**.
- Por otro lado, hay **220 mil personas** que, aun teniendo una prestación previsional, **están viviendo en la pobreza**.

Los datos oficiales muestran que dar preferencia a las personas que no tienen un beneficio previsional no corrige las severas inequidades que provocan estas moratorias. En otras palabras, las moratorias siguen permitiendo que se jubilen personas que no realizaron aportes –y por ello es que no cuentan hoy con un beneficio previsional– pero que tienen altos ingresos. Por el contrario, adultos mayores que tienen una prestación, pero que no logran salir de la pobreza, quedarán nuevamente relegados.

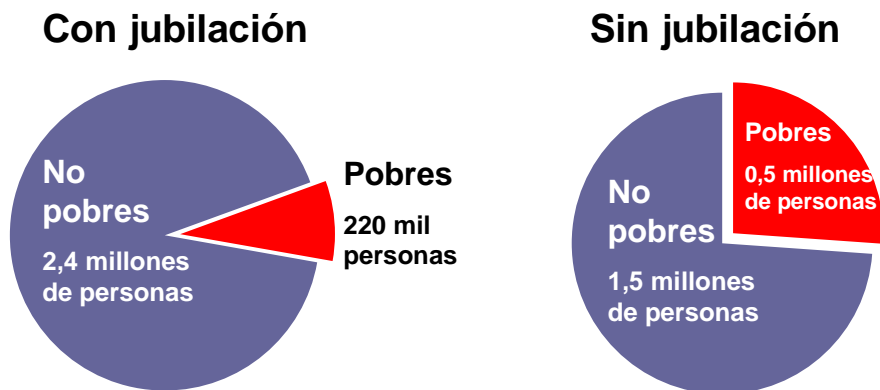
Los datos agregados que muestra el INDEC confirman, por un lado, los numerosos caso de adultos mayores sin jubilación que vive en hogares acomodados porque la familia a la que pertenece posee una sólida posición patrimonial. Por otro lado, hay una gran cantidad de situaciones en las que un adulto mayor recibe una jubilación o pensión pero vive en un hogar de bajos recursos (muchas veces junto a hijos y nietos). En consecuencia, la reciente disposición puede aliviar el desborde administrativo de la ANSES pero va a profundizar el impacto regresivo sobre la distribución del ingreso ya que implica perseverar en la política de usar fondos públicos para subsidiar a hogares de altos ingresos mientras que se niega protección a otras familias por estar recibiendo alguna prestación pero que, aún así, siguen viviendo en la pobreza.

La regresividad no es el único punto débil de esta moratoria. También cabe considerar los incentivos a favor de la informalidad –¿para qué aportar si quien no lo hace recibe idéntico tratamiento a la hora de jubilarse?– y el fuerte condicionante que genera en las finanzas públicas para el futuro. Esto no se percibe en el corto plazo, ya que las personas se van jubilando en forma gradual y, transitoriamente, reciben una prestación reducida debido a que se les deduce la cuota de la moratoria. Sin embargo, dentro de 5 años, una vez que la mayoría de estos nuevos jubilados terminen de pagar la moratoria, el régimen previsional público tendrá un gasto incremental del orden de los 14 mil millones de pesos anuales. Esto implica un volumen superior al presupuesto completo que el Gobierno nacional planea asignar en el 2007 a **educación** (\$8.800 millones) o a **asistencia social** (\$8.400 millones). Desde el punto de vista de las fuente de ingresos, se están asumiendo compromisos superiores a toda la recaudación de **impuesto al cheque** (\$11.000 millones) y levemente inferior a la de **retenciones a las exportaciones** (\$16.000 millones).

Ayudar a los mayores en estado de necesidad debe ser una prioridad, tengan o no jubilación. La mejor manera de asumir este desafío es con transferencias directas que lleguen a esas personas a través de mecanismos no contributivos destinados a asistir a los hogares en situación de vulnerabilidad social. La actual política no sólo tergiversa las reglas del sistema previsional público y profundiza la distribución regresiva del ingreso sino que además genera una muy pesada carga para las finanzas publicas. Esto tiene un impacto acotado en la actualidad pero en los próximos años implicará para el Estado no contar con los recursos necesarios para financiar inversiones socialmente estratégicas.

Mujeres mayores de 60 y hombre mayores de 65 años de edad

Total = 4,6 millones de personas



Fuente: **IDESA**
en base a
INDEC.